

Insurrección

Revista Semanal del
Comando Central del ELN

Edición N.611 - Diciembre/11/2017



Insurrección

Revista Semanal del
Comando Central del ELN
Edición N.611 - Diciembre/11/2017

SUMARIO

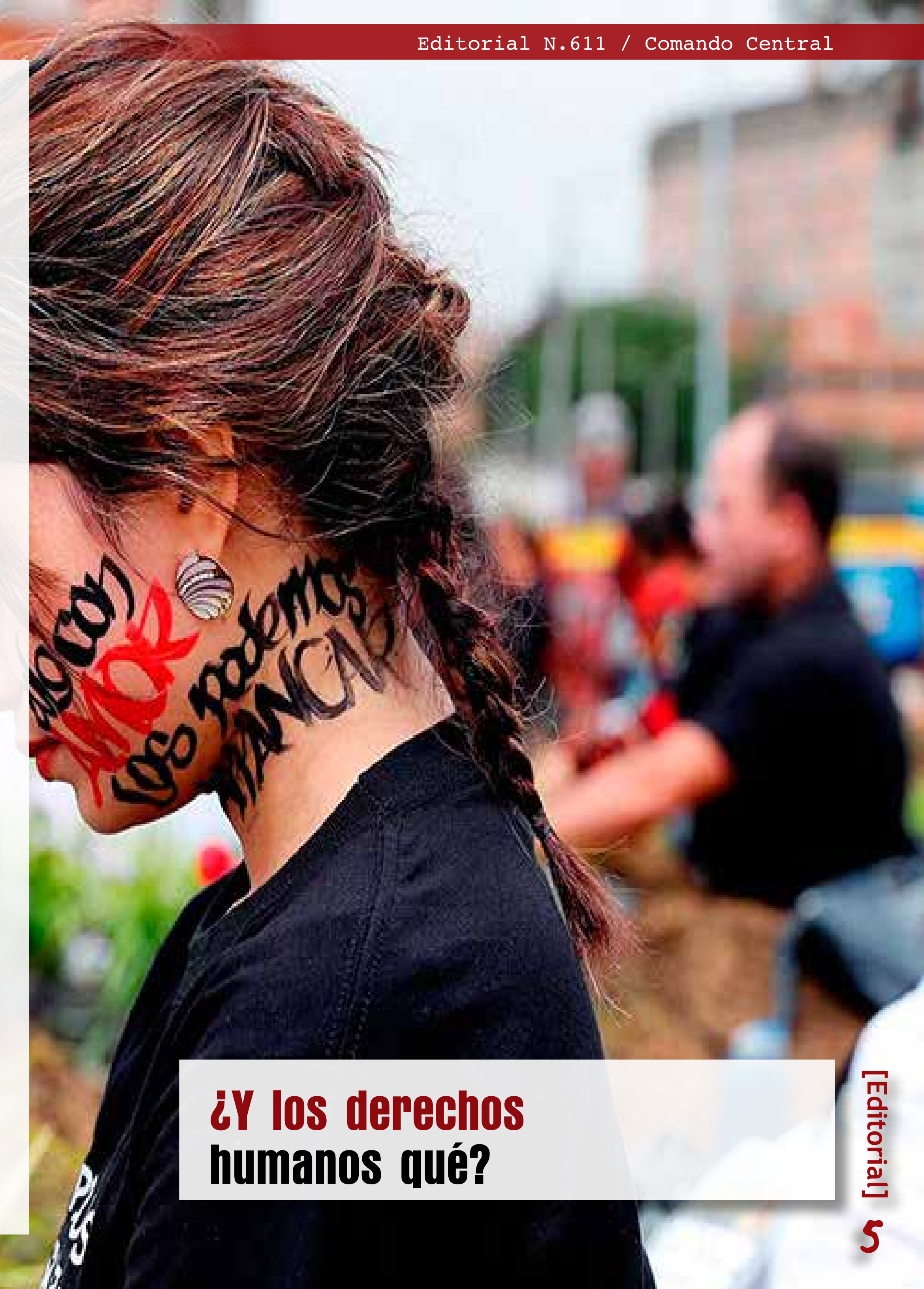
Se conmemora los 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en Colombia el régimen ya ha ganado el campeonato de ser el primer país, donde más asesinan sindicalistas y defensores de derechos humanos y el primero con mayor número de desplazados en el mundo; **No hay día en que no caigan líderes sociales, excombatientes de las Farc y jóvenes en manos de las fuerzas terroristas del Estado**.

Las Farc pactaron con le Gobierno en los acuerdos de La Habana, la constitución de una Unidad de lucha contra el paramilitarismo, con el propósito de resolver los casos que no haya resuelto el Fiscal; Pero éste, **en vez de apoyar la conformación de esta Unidad, la sabotea, no la deja funcionar y la está hundiendo**, para esconder la existencia de los 13 mil casos de determinadores de paramilitarismo, que quedaron sin juzgar, desde 2005, cuando aplicaron la ley de Justicia y paz; De los cuales 3 mil corresponden a agentes del Estado y los otros 10 mil son empresarios nacionales y extranjeros, terratenientes, políticos y altos funcionarios estatales.

Como si lo anterior fuera poco, **el Congreso aboga por que no se conozca la verdad sobre las víctimas y victimarios**, pues esto implica, descubrir a los grandes empresarios, congresistas ricos y alta oficialidad como los verdaderos responsables de crímenes atroces. Esto es al punto que el Legislativo niega la participación de los defensores de Derechos Humanos en el sistema de magistrados para la Justicia Especial Para la Paz (JEP).

Durante el cese al fuego pactado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, **el régimen ha incrementado la persecución política contra sus oponentes civiles,** tendencia que registra el Informe sobre los primeros 50 días de cese, elaborado por la Veeduría Social:

"Del 01 de octubre al 20 de noviembre registramos un total de unas 299 víctimas individuales, de los cuales 45 son homicidios, 96 son personas heridas, 35 víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados. **La mayoría de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas**, afrodescendientes y campesinos, y los departamentos más afectados en su orden son: Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. De acuerdo con las denuncias recopiladas en el presente Informe, se les



¿Y los derechos humanos qué?

atribuye a los agentes del Estado la responsabilidad en el 73 por ciento de la víctimas, autores desconocidos 17 por ciento, paramilitares el 8 por ciento y el ELN 1 por ciento".

En la misma dirección, hasta el 31 de octubre se contabilizaban 133 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2017 de forma sistemática, además de 30 excombatientes desmovilizados de las Farc, hechos que cuestionan la voluntad de las elites, para buscar una solución política del conflicto y para lograr la paz.

El presidente Santos y otros altos funcionarios del gobierno, judiciales y militares, pretenden tapar el sol de la violencia estatal, simplemente con el argumento de que "no existe un patrón sistemático" y de esa forma se garantiza la impunidad de los crímenes de Estado.

El régimen dominante en Colombia se ufana de ser un Estado de derecho, pero en realidad se sostienen con el 95 de impunidad, en los casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que comete.

El ex Comisionado Restrepo del período de presidencia de Álvaro Uribe, dijo en alguna ocasión, a propósito del fallido proceso de Justicia y paz, de legalización de los paramilitares, que **"El país no está preparado para tanta verdad"**. Esta sentencia se mantiene hasta hoy, es lo que defienden las clases dominantes sobre el respeto a los Derechos Humanos.

Será la movilización y lucha del pueblo colombiano, junto a la solidaridad de los pueblos hermanos, los que abran el camino de la paz con cambios, entre los cuales, uno de los más importantes será el respeto por los Derechos Humanos, donde el cuidado de la vida esté al centro.



El rapto de Jerusalen



Sobre los hechos de Magüí Payán



1- Desde hace un año, en los ríos Timbiquí, Guapi, López, Patía, Mira y Tapaje en el Pacífico caucano y nariñense, se posicionaron los grupos autodenominados GUP: Guerrillas Unidas del Pacífico; quienes desconocen las formas organizativas comunitarias, cometiendo atropellos contra la vida, costumbres, bienes y la convivencia pacífica.

Estos grupos aliados con las mafias del narcotráfico, operan en la zona del Pacífico en cooperación con la Fuerza Pública. Entre sus tropelías, las GUP han asesinado a 9 pobladores y líderes de la región, entre junio y octubre de este año.

2- Ante estos atropellos y asesinatos a la población, unidades del Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional, el día 27 de noviembre, llegaron a la vereda Pueblo Nuevo, del municipio Magüí Payán, departamento de Nariño, sobre río Patía, para entablar conversación con las GUP, y aclarar el comportamiento agresivo que tienen contra las comunidades; Pero, **ante nuestro requerimiento, la reacción de ellos fue la de abrir fuego contra nuestras unidades** guerrilleras, obligándolas a responder.

3- **En este enfrentamiento armado, dimos de baja a 10 integrantes de las GUP**, entre ellos se encuentran sus jefes: Álvaro, Samuel, Marcos y Tigre. También detuvimos otros 6, quienes luego de ser desarmados quedaron en libertad, por ser gente de la comunidad, puesta al servicio de esta banda por un sueldo.

En medio de la confrontación, **los integrantes de las GUP, atacaron de forma intencional y alevosa a la población civil** del caserío, dando muerte a dos personas y causando heridas a otras tres, entre ellas a dos menores de edad.

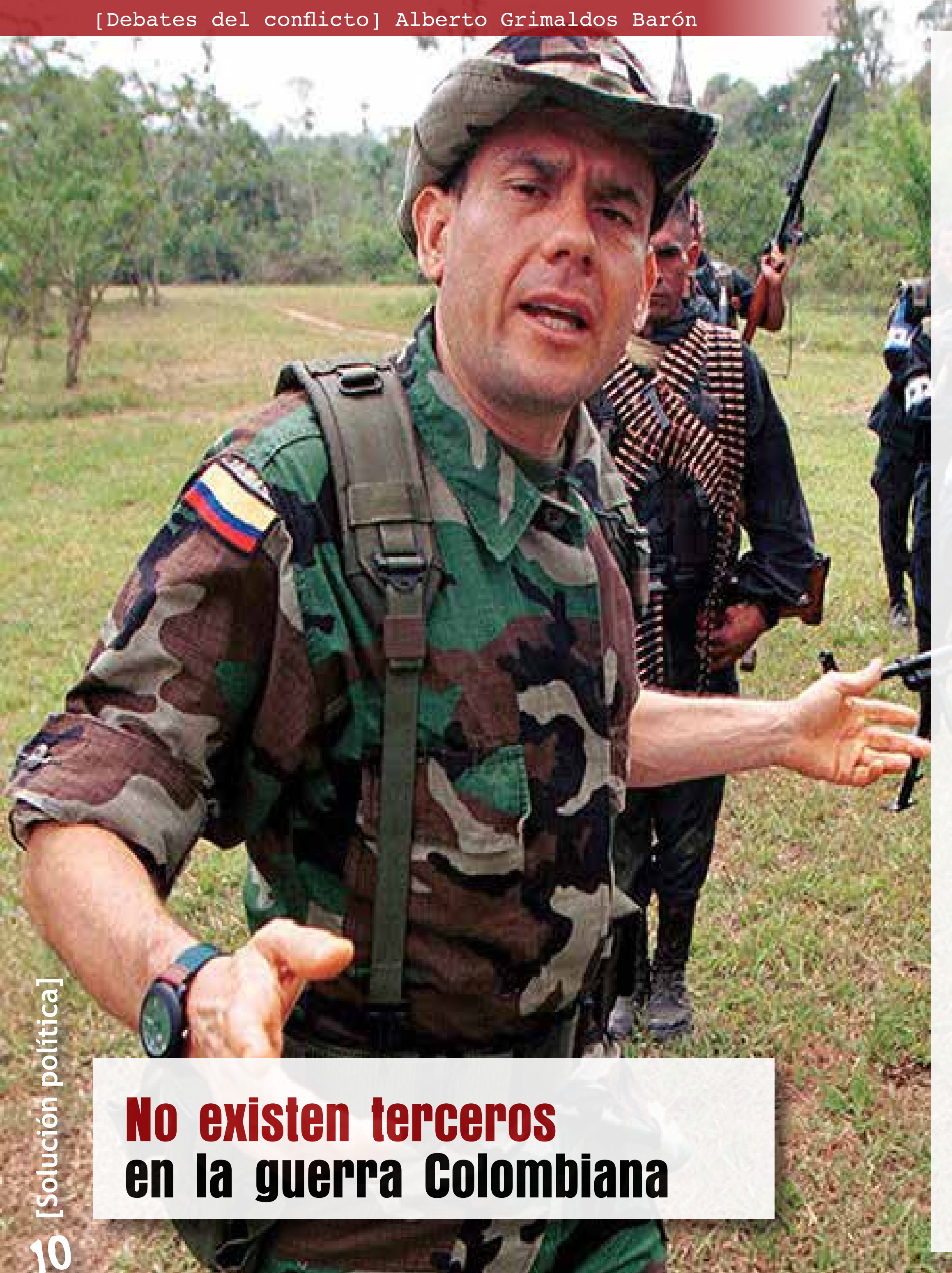
4- A las GUP en este combate, les recuperamos el siguiente material bélico: 1 ametralladora calibre 7,62 tipo comando; 2 fusiles R-15 calibre 5,56; 1 fusil Galil calibre 2,23; 1 fusil AK-47 calibre 7,62; 6 pistolas 9 mm; 2 revólveres calibre 38; 2 escopetas de repetición; 2 granadas M-26; 4 miras telescópicas; 1 lente visor nocturno; 1 casco blindado.

Dirección del Frente de Guerra Suroccidental

Carlos Alberto Troches Zuleta

Ejército de Liberación Nacional

Diciembre de 2017



No existen terceros en la guerra Colombiana

Se ha señalado que el paramilitarismo de las últimas décadas no hubiese sido posible sin el Cartel de Medellín y su cruenta violencia; se ha dicho también que surge como un resentimiento por el secuestro de Jesús Antonio Castaño —padre de los hermanos Castaño Gil— por parte de las FARC. Aunque seguramente se trata de factores que incidieron en la determinación del fenómeno, no se debe perder de vista que **el paramilitarismo es, por definición, un dispositivo contra-insurgente del establecimiento**.

Es sabido que **a finales del decenio de 1960, la estrategia paramilitar se institucionalizó en Colombia**; En principio, por la Ley 48 de 1968 —producto de las recomendaciones de la misión norteamericana dirigida por el general Yarborough— y, un año después, en 1969, por el Reglamento de combate contraguerrillas, según el cual: "Un oficial de enlace queda encargado de organizar, entrenar, equipar y movilizar las patrullas civiles (…)".

En el contexto anti-comunista, se registra también —a finales del decenio de 1970— la aparición del grupo paramilitar "Alianza Americana Anticomunista" o "Triple A", bajo la conducción de la "Escuela de las Américas" y de la cúpula militar colombiana. La "Triple A" participó de la Operación Cóndor, con la cual los Estados Unidos, mediante la guerra sucia y el terrorismo, pretendían neutralizar la izquierda política del continente.

Resulta, por tanto, indispensable evitar sesgos, mediados por señalamientos difusos que eluden y distorsionan su rasgo esencial, a menos que se quieran negar sus móviles como parte y —no como tercero— en el conflicto político colombiano.

Estimamos que esta consideración ha de permitir la adopción de posiciones coherentes; Más aún, cuando el fenómeno presenta aristas insoslayables: las bandas narcotraficantes herederas de las AUC, los para-políticos, la actividad de los llamados "terceros", en calidad de financiadores o agentes determinantes de los paramilitares, y, en general, las estrategias contra-insurgentes en el país.

Los muertos son un asunto de Estado

Las primeras actividades del clan de los Castaño Gil fueron en el Cartel de Medellín y en el denominado MAS (Muerte a Secuestradores), grupo conformado a raíz de la retención de Martha Nieves Ochoa por parte del M-19.

Se dice, sin embargo, que Gonzalo Rodríguez Gacha —segundo en el Cartel de Medellín— es el responsable del adiestramiento de los escuadrones del narcotráfico, cuyos miembros comandaron los grupos paramilitares. Rodríguez Gacha buscó el ingreso al país del mercenario israelí Yair Klein para cumplir tal función. No obstante, durante una entrevista concedida a Caracol Televisión en 2007, Klein aseveró que su visita a Colombia fue solicitada por la Policía para entrenar a sus miembros.

Si bien la participación de los capos en las actividades contra-insurgentes es innegable, su "autoría intelectual" en las masacres e innumerables crímenes, no es del todo clara. En ese sentido, la extradición de 13 capos mayores a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, la hicieron para silenciar a los perpetradores materiales e impedir que se conozca la verdad acerca de los determinadores de los crímenes; lo que representa un alivio para la elite dominante.

Según el investigador Manuel Giraldo, quien se apoya en la Revista Semana [No. 1.269, 28 de agosto/4 de septiembre de 2006], "El propio Carlos Castaño convocó a una Cumbre en Cartago (Valle), a la que asistieron más de 100 capos de la droga. Su intención era explorar la posibilidad de un sometimiento a la justicia. Apenas la mitad de ellos siguieron a Castaño y firmaron una carta dirigida al Departamento de Estado donde manifestaban su voluntad de buscar caminos para resolver definitivamente el tema del narcotráfico. Ni "Cuco Vanoy" ni "Macaco", ni los "Mellizos" firmaron; tampoco lo hizo Diego Montoya, "Don Diego", Cabeza del Cartel del Norte del Valle, porque sintió desconfianza al ver que hombres cercanos a Castaño se rehusaran a hacerlo. En esa ocasión, al igual que ahora, **los abogados de los narcos encontraron una fórmula jurídica para eludir la extradición**: convertirlos en delincuentes políticos. En otras palabras, poner el camuflado y la insignia de las AUC. Meses después, Castaño admitió que se marginó porque 'lo que querían era comprar la impunidad'.". [GIRALDO, M. Crónica oculta del conflicto. Fundación Editorial El Perro y La Rana. Caracas, 2010. p. 96.]

Pero, para identificar la posición de los capos en relación a las actividades contra-insurgentes, basta referirse a las investigaciones que se han adelantado en torno a las masacres perpetradas a finales del decenio de 1980. Por ejemplo, en noviembre de 1988, en el municipio de Segovia (Antioquia), el grupo de Fidel Castaño asesinó a 43 integrantes del Movimiento Unión Patriótica —posicionado en la región durante los comicios de 1988— y dejó heridos a otros 45. Las evidencias recolectadas, le permitieron a la justicia determinar como "autor intelectual" de la masacre al político liberal César Pérez García. Aunque Pérez García fue puesto en libertad por la legislación de entonces, tuvo que ser recapturado en 2010, junto a otros siete excongresistas, quienes, además, habían formado parte de la coalición oficialista durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Un mes después de los sucesos de Segovia, en enero de 1989, otro grupo paramilitar, tam-



bién bajo el mando de Fidel Castaño, cometió una masacre en el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota (Santander). En la "Masacre de La Rochela" —como se le conoció— se acribillaron doce funcionarios judiciales que adelantaban investigaciones en la zona. El paramilitar Alonso J. Vaquero responsabilizó al capo Rodríguez Gacha de impartir la orden. Pero, según declaraciones del "Negro Vladimir", otro de los implicados, la masacre fue dictaminada por el ex-congresista liberal Tiberio Villareal Ramos. [La verdad final de la Masacre de La Rochela. El Tiempo (Colombia) 12 de octubre de 2010.]

La autoría de los crímenes y, por ende, las directrices con las que se producen, remiten a figuras del ámbito político, asociados al poder económico regional (latifundistas, narcotraficantes y empresarios). No obstante, investigaciones acerca de la magnitud del genocidio perpetrado en contra de movimientos sociales y organizaciones políticas en el decenio de 1980, arrojan que las determinaciones provinieron de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Estado. En efecto: en reiteradas oportunidades, las víctimas denunciaron el concurso en los crímenes de miembros del Ejército, del Departamento Administrativo de Seguridad, de oficiales de inteligencia y de otros organismos del Estado.

Para finales de la década de 1980, los Castaño Gil ya habían conformado varios grupos de abierto carácter contra-insurgente. "Frente Paramilitar Independiente de Liberación" o "Muerte a Revolucionarios del Nordeste", fueron algunos de los nombres que emplearon. Sería durante los primeros años del decenio de 1990, que los grupos de los Castaño se darían a conocer como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); Una antesala de las autodenominadas, desde 1997, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se dice que los paramilitares de los Castaño mantuvieron un período de inactividad en los primeros años de 1990. En esos años, habrían participado de la creación de "Los Pepes" ("Perseguidos por Pablo Escobar"), organización integrada para la persecución del capo por sus enemigos y antiguos socios, en convenio con los Estaos Unidos, las Fuerzas Armadas y el "Bloque de Búsqueda" de la Policía. Los vínculos entre los Castaño Gil, los altos mandos militares colombianos y los EEUU Unidos se reforzaron de ese modo. Por entrevistas con el periodista Mauricio Aranguren, se sabe que Carlos Castaño llegó a reconocer que siempre tuvo "varios amigos" entre las Fuerzas Armadas.

Con la muerte de Escobar a finales de 1993 y la disolución de "Los Pepes", se sucedió un proceso planificado de expansión paramilitar. Los Castaño Gil generaron entonces estructuras a lo largo del país; Hecho inmediatamente seguido por el abierto concurso de medidas legales que avalaban la creación de esos grupos. En efecto: a través del Decreto Ley 365 de 1994, las ACCU, al igual que otras organizaciones paramilitares regionales, se hicieron legales. Se les llamó "Cooperativas de Vigilancia" (CONVIVIR), y contaron con el auspicio de varios representantes del poder político, entre ellos, del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Lo que se oculta detrás de la mafia

Sin el narcotráfico, el paramilitarismo no habría alcanzado las dimensiones que tuvo. Los paramilitares se valieron del tráfico ilícito, aún cuando se dice que Carlos Castaño llegó a oponerse al mismo para conseguir acordar con los EEUU su absolución. La extensión dada al cultivo para la producción de estupefacientes, el manejo de rutas y el control social necesario para usufructuar del negocio, son, de lejos, legados de las AUC a sus nuevos herederos, luego de haber pactado en Santa Fe de Ralito, con la directriz del ahora presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, su inserción en la legalidad.

Con la emergencia de grupos armados en zonas de reconocida actividad paramilitar, esa economía ha sido la preferente y predominante. **Se estima que en los últimos cinco años los cultivos de coca se han extendido significativamente**, en gran medida, a causa de las bandas conformadas por antiguos subordinados de los Castaño Gil.

Por ejemplo, se sabe que en el caso del Clan del Golfo, responsable de la mayoría de cultivos de coca en el occidente del país, sus dos altos mandos, los hermanos David Antonio y Juan de Dios Úsuga, pertenecieron a las estructuras de las AUC; pero también, que, anteriormente, habían integrado las filas del EPL.

Aunque ello se explica por los conflictos que mantuvo las FARC con el EPL, la denuncia de las FARC, acerca de que sus ex-combatientes están siendo convocados por esa organización para ser empleados en actividades de "economía ilegal", da cuenta de que las procedencias políticas son irrelevantes y, que, en su lugar, prima el fin lucrativo.

Lo anterior, sin embargo, **no significa que las estrategias contra-insurgentes y, por ende, el paramilitarismo, hayan desparecido**; Ese es el énfasis que nos interesa hacer.

Sin duda, son ineludibles las acciones en contra de dirigentes sociales, especialmente campesinos, indígenas y afrodescendientes. A la fecha (diciembre de 2017), organizaciones denuncian más de 270 incidentes en menos de dos años, los cuales contemplan amenazas, atentados, agresiones, secuestros, y una alarmante cifra de 180 asesinatos.

Al igual que en los decenios de 1980 y 1990, el uso de amenazas en contra de dirigentes de izquierda ha sido recurrente. Las amenazas son generalmente firmadas por las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", "Águilas Negras", "Nuevo Renacer" (en el Caquetá) o "Héroes del Nordeste" (en Antioquia). Se asevera, por ejemplo, que Mario Castaño, uno de los más recientes líderes sociales asesinados (noviembre de 2017) en Belén de Bajirá (Chocó), habría recibido ese tipo de amenazas.

Los crímenes perpetrados por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia —algunos estiman que se trata del mismo Clan del Golfo— comprometen las regiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato, Sur de Córdoba, Norte del Cauca y Valle; siendo, no obstante, los departamentos de Tolima, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca, los que registran la principal tasa de asesinatos.

El ascendente número de incidentes reitera un hecho evidente. Pese a las pretensiones de las FARC, aún no hemos salido del círculo de la guerra. Si asumimos, como parece lógico, que gran parte de las más de 22 estructuras armadas emergentes no mantienen móviles políticos claramente definidos, ¿cómo explicar esta violencia política?; O bien, esclarecemos la manera en que tan elevado número de asesinatos de líderes sociales pueden afectar las economías ilícitas de las bandas y grupos armados; o bien, optamos por recurrir a otra vía explicativa de los crímenes.

Nadie duda del poder territorial que puede ostentar el Clan del Golfo, la banda más grande del país. Cifras oficiales estiman que cuenta con más de 3 mil hombres en armas y las comunidades hacen constantes reportes de su presencia. Pero, acaso será el Clan del Golfo responsable de tan alarmante tasa de asesinatos políticos. La palestra parece ser la misma que en el decenio de 1980, cuando los crímenes contra la izquierda eran asumidos como un puñado de "casos aislados", reducidos en su autoría a los Carteles de la droga o, eventualmente, a la delincuencia.

El Estado colombiano sigue implementando la guerra sucia. Cuando la mafia y el crimen no le es funcional, opta por recurrir a la realización de operaciones encubiertas, en las que las líneas divisorias entre el paramilitar y el "soldado institucional" se pierden. No obstante, conforme el Estado incurre en crímenes que no consiguen evadir la opinión pública, encuentra en las bandas "chivos expiatorios" para eludir responsabilidades.

Carlos Castaño solía afirmar que no asesinaba campesinos, sino "guerrilleros de civil"; el Ejército, por su parte, asesinó campesinos para presentar "positivos". Existe una proximidad ideológica entre las Fuerzas Militares y los paramilitares; la misma identidad que ha existido entre los gobiernos colombianos y la doctrina anti-comunista de los EEUU.

Además de los denominados "Falsos Positivos", el asesinato de 9 campesinos en Tumaco (Nariño) durante protestas en contra de la erradicación forzosa de los cultivos de coca, el pasado 5 de octubre, por parte de miembros de la Fuerza Pública —a ojos de todos— es muestra fehaciente de la magnitud del problema. Tendencia que, según parece, seguirá presentándose, pese a los procesos de paz con las guerrillas.

Sobre los incidentes de Tumaco, se aseveró acerca del interés de las FARC y de las bandas para impedir la actividad de la Fuerza Pública. No obstante, se desconoció que los manifestantes reclamaban la puesta en marcha de programas para la sustitución de cultivos, como fue pactado en La Habana. El mismo argumento fue reiterado en



el Congreso de la República; pero, esta vez, a propósito de las dieciséis Circunscripciones Especiales de Paz que se acordaron con las FARC. Sectores de derecha se opusieron a su aprobación, bajo el pretexto de que suponían la inclusión en política de los narcotraficantes, dado que la mayoría procederían de zonas con presencia de cultivos de coca.

Lo cierto es que tanto en Colombia como en los EEUU los dineros del narcotráfico circulan libremente. Entidades oficiales han reconocido que en Colombia lavan más de ocho mil millones de dólares al año, provenientes de la economía ilícita. No existe, por tanto, un concurso pleno para el combate a la mafia; quizás sea esa la razón por la que las políticas antidrogas fracasan. En todo caso, en las regiones, las bandas del narcotráfico persisten bajo el beneplácito de policías y funcionarios, mientras en altos escaños del poder, reciben amparo de representantes, senadores y miembros de la rama judicial.

La razón presentada por los políticos que se opusieron a las dieciséis Circunscripciones Especiales sólo denota negación de la crisis social, e insistencia en la exclusión política. Con todo, el narcotráfico se ha convertido en un pretexto de los gobernantes para seguir fomentando la guerra sucia.

La verdad necesaria

Pese a las declaraciones de paz, las estrategias contrainsurgentes siguen presentes en el oficio de las Fuerzas Armadas y en las acciones para reprimir la protesta social. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales no cesan y las operaciones en las que miembros del Ejército se hacen pasar por agentes paramilitares para atentar contra civiles, sigue siendo denunciadas por las comunidades. Los contubernios entre la Fuerza Pública y la mafia son un hecho y las actividades políticas de Álvaro Uribe Vélez y sus allegados siguen siendo lesivas para la paz y la democracia. La violencia política no ha terminado.

Por si fuera poco, el Congreso de la República ha exculpado a los promotores del paramilitarismo. Según lo determinó, no estarán obligados a presentarse ante los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que, aunque acordada en La Habana bajo la pretensión de cobijar a otros actores del conflictivo —además de las FARC— ha sufrido alteraciones significativas, propinadas por los enemigos de la paz. Entre los mal llamados "terceros" —por cuanto se trata de agentes determinadores— y las mayorías en el Parlamento hay un mismo interés, eso es lo que reitera el hecho.

Una salida a la guerra sucia debe buscarse con el concurso popular y ciudadano. Los pobladores, las víctimas de la guerra, los combatientes, las organizaciones sociales, y la sociedad en general, deben comprometerse con la verdad y la justicia. La guerra a la impunidad debe ser la divisa. Sin ese concurso y una decidida participación en la definición de políticas estructurales, Colombia seguirá siendo la negación de la paz. Y esa verdad hay que decirla; hay que insistir en ella una y mil veces si es necesario.


Diálogo Nacional
por un acuerdo de Paz



Las fracturas de la delegación del gobierno

Esta semana el general retirado Eduardo Herrera dijo que hay "una crisis de la delegación" del Gobierno en la Mesa de Quito, y que "hay diferencias al interior". Por su parte, el presidente Santos, anunció que renovará todo el equipo del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.

Así haya renunciado el jefe y toda la Delegación de Diálogo del Gobierno, esperamos que continúen respaldando el proceso de conversaciones que se desarrollan en Quito y las búsquedas de paz. **Queda el interrogante de si la nueva Delegación expresará un cambio de políticas y no sólo de personas**. Si ello no ocurre, será difícil avanzar en la Agenda de conversaciones pactada en Caracas, el 30 de marzo de 2016, en Caracas.

Hay cuestiones sustanciales en la conducta de las clases gobernantes, que se atraviesan a las salidas de paz y a los avances del proceso de solución política del conflicto. Menciono algunas de ellas:

1. Hacer acuerdos y no cumplir

Equivalente a **"ponerle conejo" a los acuerdos**. La misma conducta de no cumplir que los gobernantes de siempre, le han aplicado a lo pactado con las movilizaciones de masas, es la que han practicado con la insurgencia. Expresión reciente de ello es el drama de lo acontecido con los acuerdos de la Habana y su implementación; donde las Farc cumplieron, pero el Estado no. Lo mismo ha pasado con los acuerdos y protocolos, que se hicieron para el cese al fuego bilateral, temporal, nacional con el ELN.

Igualmente, la Mesa de Quito ha estado limitada por las discrepancias frente a los criterios que de nuestra parte estamos exigiendo, como "acordar y ejecutar" y "simultaneidad en la ejecución" de ambas partes. Esta último, queda más que evidente, dada la experiencia de lo que ha pasado con el "conejo" a los acuerdos de la Habana.

2. Aferrarse a "líneas rojas"

Las elites dominantes han reducido la paz al silenciamiento de los fusiles, la entrega de armas y la desmovilización de las gue-



rrillas. Se han negado a examinar los cambios en relación a aquello que ha originando el conflicto social, político y armado en el país. **Sin cambios, no es factible avanzar hacia la paz.** Las clase dominante al trazar "líneas rojas" frente al examen del modelo económico y ambiental, el régimen político, la doctrina de las fuerzas armadas y otros temas que están en el origen de los problemas centrales del país, impiden avanzar en los acuerdos de paz y llevan al estancamiento y la parálisis de los procesos de solución política.

3. Negar la participación ciudadana

Así no lo expresen abiertamente, las elites se niegan a la participación amplia, democrática y decisiva de la sociedad en el proceso de paz, tal como se expresó en el proceso de la Habana y se quiere imponer en la Mesa de Quito, si bien fue positivo en esta dirección fue la realización de las llamadas Audiencias Preparatorias, de fines de Octubre y principios de Noviembre de este año. **Esperamos que el 2018, el gobierno tenga un cambio de políticas que facilite un acuerdo de mesa y con la sociedad**, en los diseños que pactemos para el desarrollo del punto uno de la agenda de conversaciones: la participación de la sociedad.

4. Tratar de imponer requisitos previos

Otro factor que ha limitado la marcha del proceso de conversaciones, ha sido el unilateralismo o los **condicionantes que impone el gobierno por fuera de lo acordado**. Recordemos que la instalación de la mesa pública, pactada el 30 de marzo del 2016, solo se pudo realizar 10 meses después, en Febrero del 2017, una vez se encontró en la mesas una salida provisional a los condicionantes del gobierno. Lo mismo se presento frente a las audiencias preparatorias, acordadas en lo básico en el primer Ciclo, pero sólo pudimos concretarlas en el Cuarto, gracias al acuerdo de Cese bilateralal fuego.

¿Cómo entra el ELN al 2018?

Reiterando explícitamente nuestro compromiso con el proceso y la búsqueda de un acuerdo de paz que propicie nuevas y mejores realidades en el país. Esa es nuestra disposición para el Quinto ciclo y para el año que viene. Sabemos que un sector importante de las elites que manejan el país, especialmente los representados por los seguidores de Uribe y Cambio Radical, se oponen a cualquier salida dialogada y al mismo proceso de conversaciones. Ante ello, **llamamos a facilitar y dinamizar un gran movimiento de mayorías por la paz** y los cambios que abra otras perspectivas para la nación y los colombianos.

Pensando en el proceso de paz, **esperamos que las nuevas caras en la Delegación de Dialogo del gobierno, expresen cambios en las políticas y las lógicas del gobierno** frente al proceso en lo que resta del mandato de Santos. Replantear los condicionantes, los incumplimientos, las "líneas rojas", el temor a la participación, las negaciones a los acuerdos que fundamentaron el cese, permitir ejecutar el desminado en la región ya acordada y un dialogo social humanitario en el Choco; y todos los demás atranques que han pesado sobre la Mesa de Quito en este 2017.

Por qué en Arauca no hay coca

En recientes declaraciones, el presidente Santos pretendió embolsillarse el éxito de la erradicación de cultivos de uso ilícito en el Departamento de Arauca, cuando dicho logro no contó con el apoyo gubernamental y por el contrario las acciones del Estado y sus instituciones, han dificultado desde sus inicios, este proceso popular de erradicación de los cultivos de coca.

Entre en abandono, la coca y el terror

La región de los llanos orientales y específicamente Arauca se caracteriza por ser una región agrícola y ganadera; pero la configuración de la narco república en Colombia, durante la década de los 80 del siglo anterior, trajo al Departamento el narcotráfico y mafias organizadas desde el Guaviare y el Meta, quienes fueron copando el territorio y las fincas ganaderas y agrícolas, blanco fácil por el abierto abandono estatal a la economía campesina de la región; Evidenciado en la falta de vías de acceso, insumos agrícolas y créditos.

Al decaer la agricultura y la ganadería en Arauca, por el aumento de la producción de coca; El tejido social de las comunidades se fue deteriorando, por la penetración de la cultura del narcotráfico, impuesta a sangre, fuego y terror.

El negocio de la coca además de martirizar la economía y cultura de la región, hizo uso de ejércitos paramilitares para mantener su dominio en el Departamento, claro ejemplo de esto fueron los grupos de mercenarios financiados por Julio Acosta Bernal, hoy preso por paramilitarismo y corrupción; También el grupo paramilitar de los llamados Mellizos, y sus alianzas siniestras con el General Carreño, bandas mafiosas de Urabá y con Martín Llanos del Casanare, para perpetrar masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamiento de comunidades.

Un caso emblemático fue el asesinato del Registrador y el subsiguiente fraude de las elecciones, durante el saliente gobierno de Pastrana y el entrante de Uribe (2002-2010), que estuvo acompañado de una arremetida frontal en contra de los líderes sociales y populares, a partir de la instauración en Arauca, de una de las tres Zonas de rehabilitación y consolidación proyectadas en el país, que significaron un estado de sitio perma-

nente, con capturas masivas de población, encarcelamiento y judicialización de lideres sociales y políticos, masacres de pobladores, como las de Cachama, San Ignacio, Flor Amarillo y Piñalito en el municipio de Tame; y La Cabuya en el municipio de Hato Corozal, Casanare.

Ambiente de terror consolidado por las concesiones militares hecha a los Estados Unidos en la región, al entregarles las Bases aéreas de Apiay en el Meta, Marandúa en el Vichada, y el acantonamiento de mercenarios estadounidenses en las Bases militares del Batallón Rebéiz Pizarro de Saravena y en Caño Limón del municipio de Arauca.

Frutos de la rebeldía organizada

Entrando la década del 2000, **el Frente de Guerra Oriental intensificó la aplicación de la política elena de Deslinde Categórico con el narcotráfico**, con una la campaña educativa dentro de las comunidades araucanas, en contra de las estructuras narco paramilitares y de su negocio de la cocaína.

En campaña política desde 2006, **los Frentes araucanos del ELN explicaron a la población el deterioro social y cultural que causa la producción de coca**, su amenaza medioambiental, y el ecocidio creciente por cuenta de la aspersión aérea del Glifosato, usado para la erradicación de los cultivos de coca. Haciendo énfasis en la necesidad de rescatar la economía campesina, que siempre caracterizó al Departamento.

Este proceso de concientización y participación de las comunidades, desarrolló consultas en Asambleas populares y Juntas Comunales, con el fin de buscar una salida al problema de la coca y el paramilitarismo, que fue tan exitoso que logró un consenso del 70 por ciento de toda la población del Departamento, a favor de la sustitución gradual de las plantaciones de coca, y de su reemplazo por cultivos de plátano, yuca, pastos, caña de azúcar y cacao.

El mejor cacao del mundo

Mientras la acción estatal se centra en usar su aparato militar represor, la erradicación forzosa, la aspersión aérea de Glifosato y en la persecución a los líderes de la sustitución voluntaria de cultivos de coca -tal como ocurre hoy en el Pacífico nariñense, chocoano

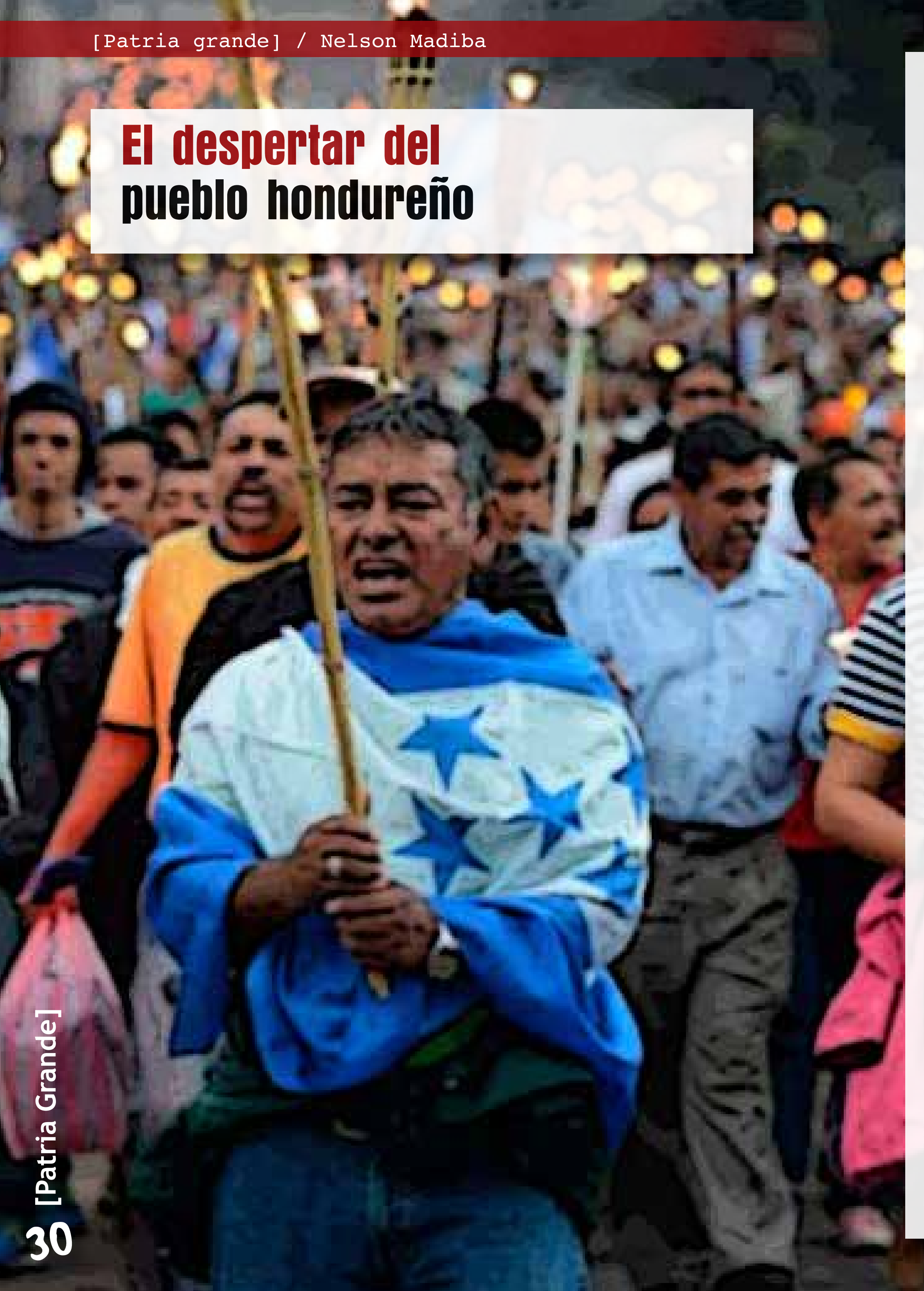


y otras zonas del país-, las organizaciones sociales araucanas lograron la transformación agrícola del pie de monte llanero, en los municipios de Tame, Fortul y Arauquita.

Más de 13 mil hectáreas de cultivos de coca fueron erradicadas por el pueblo araucano, de las cuales hoy cerca de 9 mil están convertidas en plantaciones de plátano y cacao, que ha significado la recuperación de la agricultura en el Departamento y el fortalecimiento del tejido social. El caso más representativo de esta erradicación, lo constituye el Municipio de Fortul, que para el año de 2009, logró quedar totalmente limpio de cultivos de uso ilícito.

Como lo demuestra el abundante material audiovisual recopilado por organizaciones internacionales y fundamentalmente el testimonio de los araucanos que vivieron este proceso; el gobierno nacional no tuvo que ver en nada con este logro y por el contrario, torpedea el desarrollo de Arauca con aumento de impuestos, abandono estatal, no inversión en vías e infraestructura; además de mantener el contubernio con las operaciones y bandas paramilitares.

Si el cacao de Arauca es uno de los mejores del mundo, nada tiene que ver con la gestión de los sucesivos gobiernos de Bogotá, mucho menos con su represiva y fracasada política antidrogas. Y si hoy en Arauca el sol llanero alumbra los senderos de la soberanía y la liberación, es gracias a la bravura de su pueblo, que hoy más que nunca puede contar con el ELN, hasta las últimas consecuencias.



El despertar del pueblo hondureño

En los años 80 del siglo pasado Honduras constituía un país absolutamente controlado por el imperialismo norteamericano. Se decía que la presidencia real la ejercía Estados Unidos, jugando en ello un papel destacado la Base militar de Palmerola, sede de la dirección militar para todo el continente y para Centroamérica en particular.

Hoy Colombia es un inmenso portaaviones para la agresión a Venezuela, antes Honduras, cuando el ascenso en la lucha de liberación de los pueblos nicaragüense y salvadoreño, fue un centro de operaciones, que posibilitó el desarrollo de políticas hostiles a la revolución Sandinista. Desde el territorio hondureño se adiestraban y se lanzaban las operaciones contra revolucionarias para sabotear la economía, destruir la producción y asesinar la población de Nicaragua. Fue bastante conocido el papel de retaguardia a la contra nicaragüense jugado por la oligarquía hondureña, la cual fue sostenida con dineros provenientes del presupuesto estadounidense y del narcotráfico.

Cualquier brote de inconformidad social era apagado a punta de asesinatos y desapariciones. Las masacres al pueblo hondureño, que destruyo a profundidad el proceso organizativo y pretendía mermar la tradición de resistencia morazanista, eran incontrolables y se pueden contar por miles las víctimas, producto de décadas y décadas de terrorismo contra ese pueblo, para hacer posible el control colonial de parte de los EEUU. Se trataba al fin y al cabo evitar que se extendiera la revolución popular por todo Meso América, pues **las fuerzas populares del FMLN también luchaban por cristalizar la libertad**. Para apagar el volcán Centroamericano en plena erupción.

Golpe de Estado a Zelaya

Pasaron décadas para que el pueblo hondureño recuperase sus alientos y se sacudiera de la dura represión de los distintos gobiernos que simbolizaron la dictadura colonial norteamericana. La irrupción de gobiernos progresistas en el continente nuestra americano, junto al proceso de conciencia social que se agita en el pueblo permite la elección de Manuel Zelaya por el partido liberal, quien en ese momento recogió y proyectó toda la inconformidad social.



Este hecho político no pasó inadvertido para el gobierno de Obama, porque significaba el inicio de un proyecto de autonomía hondureño y de articulación a la corriente bolivariana continental, con el consiguiente deterioro de la hegemonía estadounidense. Por eso **desde el Pentágono se estimularon y organizaron el golpe de estado del 2009**, que terminó con el derrocamiento del presidente legítimo, Manuel Zelaya, hecho cuestionado y repudiado por un grueso número de países de América y del mundo.

El pueblo hondureño se movilizó en contra del golpe de Estado, exigiendo la restitución del presidente Zelaya, quien desde el exterior, a donde fue desterrado, acompaña la resistencia. Todo el movimiento de lucha contra el golpe origina un importante frente popular de resistencia que agrupa a sectores campesinos, estudiantes, maestros, ambientalistas, clase media y otros que finalmente, junto a la presión de Unasur y gobiernos del continente, posibilitaron el regreso de Manuel Zelaya. Sin duda esta victoria popular potencia la lucha en contra del gobierno dictatorial, que se instaló con el golpe, quien vio fortalecida las movilizaciones por la tierra, la defensa de los recursos naturales y por el respeto de los derechos humanos, ante la avalancha represiva.

Muy significativo ha sido el surgimiento del Partido Refundación, que lidera Manuel Zelaya, al canalizar un salto en la conciencia política del pueblo hondureño y también el nacimiento del Partido Anticorrupción, producto de una lucha y sentimiento nacional.

Ante la burla a la voluntad popular, los grandes medios guardan silencio

Las elecciones del actual presidente, Juan Orlando Hernández, hace cuatro años fueron bastante cuestionadas por el fraude electoral, realizado mediante la compra de votos, el voto de personas fallecidas, la adulteración de las actas de votación y toda suerte de trampas, que impidieron la victoria de la candidata del Partido Refundación y Patria Libre Xiomara Castro. Fraude que aumentó la resistencia del pueblo hondureño con la misma acción represiva del actual presidente, quien multiplicó los asesinatos políticos contra el movimiento social y toda la oposición, entre ellos el asesinato de la líder Bertha Cáceres. Este gobierno es el que más asesina líderes ambientalistas, opuestos a los mega proyectos y defienden los territorios de los pueblos.

Hoy se repite la historia de los fraudes dictatoriales de la mano visible de los EEUU, ante la evidencia inocultable de un triunfo de la Alianza contra la dictadura, que agrupa al Partido Anticorrupción de Salvador Nasrala, el Partido Refundación Patria Libre dirigido por Manuel Zelaya y el todo movimiento de la resistencia. La aspiración de esta Alianza es constituir un gobierno democrático, con un proyecto nacional para las mayorías, en un país donde ha reinado el terrorismo de Estado como soporte al colonialismo norteamericano.

Condenable el papel jugado por los medios de la desinformación social, como decía Eduardo Galeano, **"En un mundo donde los medios en lugar de difundir, callan, en lugar de informar desinforman y la verdad es convertida en mentiras"**, las dicta-



duras se ensalzan y bendicen condenando a las verdaderas democracias participativas quien son señaladas de dictaduras como sucede con Venezuela. Es poca y demasiada pobre por no decir nula la difusión de los hechos represivos y las acciones criminales de una dictadura oligárquica, repudiada hasta por los cuerpos policiales, que se cansaron de reprimir al pueblo y se declararon en paro, acuartelándose como una forma de negarse a ejecutar las órdenes del mando criminal hondureño.

Los 14 asesinatos, los 100 heridos y los 800 detenidos, causados por la represión a las protestas por el fraude electoral, no han merecido la condena de los organismos internacionales de derechos humanos de la OEA, ONU, Unión Europea, ni de otros organismos internacionales. Es una actitud condenable dado que con su silencio, lo que hacen es brindar un apoyo abierto a régimen dictatorial hondureño y se constituye en poderoso aliento, para que sigan el genocidio contra el pueblo de Francisco Morazán.

El pueblo hondureño despertó de un largo sueño producido por el terrorismo colonial norteamericano, ejecutado por una oligarquía arrodillada a sus mandatos. Este pueblo es todo un volcán de sueños de bienestar, de justicia, libertad e independencia y democracia. El gran temor de los EEUU es parecido al de los años 80: que se junten las luchas del pueblo hondureño, con un gobierno democrático articulado a los gobiernos progresistas de San Salvador y Nicaragua, que actuaría como estímulo a otros pueblos.

Damos toda nuestra solidaridad insurgente con el pueblo hondureño. Confiamos en su capacidad de movilización para sacudirse de la dictadura.



El comisionado de ONU para los DDHH

El Comandante Pablo Beltrán envía un saludo a propósito del reconocimiento que la Corporación Vivamos Humanos le hace a Todd Howland, además de otorgarle el Premio Alfonso López Michelsen 2017 por su contribución a la construcción de la paz en Colombia y la defensa de los Derechos Humanos.

Para la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional es muy importante reconocer el esfuerzo y el papel de Todd Howland, jefe del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en este momento que vive el país. La oficina de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y el trabajo de Todd ha tenido un rol humanitario muy importante, el cual ha permitido un mayor acompañamiento a las comunidades y los líderes sociales.

Es importante mencionar que este acompañamiento no solo se presenta después de los hechos, queremos resaltar el trabajo de orden preventivo, ya que no solamente se trata de contar muertos y hacer estadísticas. El trabajo del acompañamiento a las comunidades también es esquivar y evitar los hechos violentos. Esto se ha logrado mediante las alertas, los llamados, y las denuncias sobre algún tipo de situación. Por lo tanto, queremos resaltar que este trabajo se ha diferenciado los anteriores.

Otro elemento para resaltar es el trabajo de acompañamiento a las comunidades cuando se movilizan y participan dentro de la protesta social. Como por ejemplo el llamado que se hizo hace un mes, donde se denunció un tratamiento de guerra a las movilizaciones indígenas y campesinas. Lo anterior es muy importante, porque en Colombia se ha hecho un esfuerzo para que no se criminalice la protesta social, para que la movilización se vea como un derecho y no algo subversivo o criminal. Esto al contrario de muchos, contribuye a la democracia; y es necesario el control social cuando algo no funciona en el país.

Colombia merece democracia y menos represión, por esto es importante el acompañamiento a la movilización, los líderes y las comunidades cuando hacen interlocución, diálogos y negociación con el gobierno. Como organización reconocemos que Howland ha hecho grandes esfuerzos en este sentido.

Por último cuando hay un respaldo a las organizaciones socia-

¡Colombia merece democracia y menos represión!



les y el trabajo de acompañamiento preventivo, para nosotros esto es favorecer el dialogo, favorecer una salida política, y una cultura de llegar acuerdos. Esto en esencia es lo que entendemos como solución política a los conflictos; es otra cultura donde ese habla, en lugar de excluirse violentamente.

La protesta se presenta porque hay incumplimiento, y esto es una práctica que ha patentado el gobierno como una estrategia. Es un grave problema porque es un una estafa y una traición a las comunidades. Para que haya solución política es necesario cumplir también.

Agradecemos el trabajo de Todd Howland, lo reconocemos como cultivador de una cultura de solución política en Colombia a través del ejercicio de derechos humanos. Esperamos que siga pendiente de nuestro país, desde su nuevo cargo, y de que sus obras tengan una continuidad.

Ver vídeo completo en:
http://bit.ly/2jAkuTU

Canales YOUTUBE:
-> ELN Paz
-> ELN Colombia


@eln_voces